

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT GOBACIT

NETWORK

WORKING PAPERS

**Water politics, violence, and injustice:
experiences from Brazil, Guatemala, and Mexico**



Vol. 7, N° 1

(In Portuguese and Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK, and Mexico City, March 2020

[Cover picture](#): Santo Domingo River, in the Guatemala-Mexico border, Bárbara Pohlenz de Tavira, 31 December 2018.

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)



ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Vol. 7, N° 1

Thematic Area Series

Thematic Area 10 - Water and Violence

Water politics, violence, and injustice:
experiences from Brazil, Guatemala, and Mexico

Jose Esteban Castro (Ed.)
Karina Kloster (Org.)
Newcastle upon Tyne and Mexico City, March 2020



WATERLAT-GOBACIT Research Network

5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom

E-mail: waterlat@ncl.ac.uk

Web page: www.waterlat.org

WATERLAT-GOBACIT NETWORK Working Papers

General Editor

Jose Esteban Castro

Emeritus Professor,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Editorial Commission: ([click here](#))



ISSN 2056-4856 (Impreso)

ISSN 2056-4864 (En línea)

Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT

Vol. 7, N° 1

Serie Áreas Temáticas

Área Temática 10 - Agua y Violencia

**Política del agua, violencia e injusticia:
experiencias de Brasil, Guatemala y México**

José Esteban Castro (Ed.)

Karina Kloster (Org.)

Newcastle upon Tyne y Ciudad de México, marzo de 2020



Thematic Area Series

TA 10 - Water and Violence

Title: Water politics, violence, and injustice: experiences from Brazil, Guatemala, and Mexico.

Correspondence:

Karina Kloster

Autonomous University of Mexico City
Avenida de la Corona 320, Col. Loma de la Palma,
Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07160
Mexico
Telephone: +52 55 3691 2050 Ext. 18446
Email: karina.kloster@uacm.edu.mx

Corresponding authors:

For comments or queries about the individual articles, contact the relevant authors. Their email addresses are provided in each of the articles.

Serie Áreas Temáticas

TA 10 - Agua y Violencia

Título: Política del agua, violencia e injusticia: experiencias de Brasil, Guatemala y México.

Correspondencia:

Karina Kloster

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Avenida de la Corona 320, Col. Loma de la Palma,
Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, C.P. 07160
México
Teléfono: +52 55 3691 2050 Ext. 18446
Email: karina.kloster@uacm.edu.mx

Autores Correspondientes:

Para enviar comentarios o consultas sobre los artículos individuales incluidos, por favor contacte a los autores relevantes, cuyos datos de contacto son provistos en cada uno de los artículos.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the Thematic Area and the current issue	1
Presentación del Área Temática y del presente número	2
Presentación de la Organizadora	3
"Cercamento das águas e acumulação primária permanente: a Barragem de Acauã e o novo caminho das águas no Estado da Paraíba, Brasil" <i>Hugo Belarmino de Moraes</i>	5
"Despojo y violencia contra pueblos Chuj en Guatemala por imposición de obras hidroeléctricas" <i>Ana Pohlenz de Tavira</i>	23
"El exterminio selectivo de los ambientalistas en México (enero 2017-abril 2019)" <i>Myriam Fracchia Figueiredo</i>	40
"De la resistencia a la gobernanza clandestina. Violencia y transformación ecoterritorial por la construcción de la Presa Hidroeléctrica "El Cajón", Nayarit, México" <i>Mariana Betzabeth Pelayo Pérez</i>	72

Presentation of the Thematic Area and the current issue

This is the second issue developed by members of the WATERLAT-GOBACIT Network's Thematic Area 10, [Water and Violence](#). Research done by members of this TA focuses on how violence, whether systemic-structural, subjective, symbolic, or in any other of its many forms, has become the key mechanism through which the relations between human beings, and between humans and Nature, are de-structured and reconfigured, and new kinds of relations are created, producing new forms of territorial, social and political power and domination. TA10 aims to explore, examine, and contribute to a better understanding of the often-traumatic experiences emerging from these processes of social reordering, whose consequences of socio-ecological dispossession can be observed in the form of environmental deterioration and destruction of the material basis of life, and most notably in the case of water sources. Its objective is to also contribute towards the development of conceptual and methodological frameworks that place the emphasis on understanding and explaining how the use of violence as a mechanism has an impact in the evolving forms of water politics and management currently being implemented worldwide, particularly looking at the consequences of these processes, as well as at the potential alternatives to confront the rapid increase of inhuman and anti-democratic practices and discourses in the processes of water control and accumulation. Within this framework, the present issue, organized by Dr Karina Kloster, from the Autonomous University of Mexico City (UACM), includes four articles that are the result of ongoing research covering experiences of water-related violences and injustices identified in Brazil, Guatemala, and Mexico. Many of these events are the result of criminal activities carried out by governments' security forces, illegal groups, and other violent actors, often working jointly to impose the appropriation of land, water, and other resources belonging to rural, indigenous and peasant communities. The issue is an important contribution to ongoing debates. We wish our readers a fruitful experience..

Jose Esteban Castro

General Editor

Presentación del Área Temática y del presente número

Este es el segundo número desarrollado por miembros del Área Temática 10, [Agua y Violencia](#) de la Red WATERLAT-GOBACIT. Las investigaciones realizadas por los miembros de esta AT estudian cómo ya sea sistémica-estructural, subjetiva, simbólica o en cualquiera de sus muchas formas, aparece como la expresión cada vez más evidente del mecanismo con que se desestructuran y reconfiguran relaciones entre los individuos y con la naturaleza, dando lugar a la emergencia de nuevas formas de dominación y poder territorial, social y político. EL AT10 se propone explorar, examinar y contribuir a una mejor comprensión de las experiencias, frecuentemente traumáticas, que emergen de estos procesos de reordenamiento social, cuyas consecuencias de desposesión socio-ecológica pueden observarse en la forma de expoliación del medioambiente y destrucción de las bases materiales de la vida, muy particularmente del agua. es también contribuir al desarrollo de marcos conceptuales y metodológicos que coloquen el énfasis en la comprensión y explicación de cómo el uso de la violencia como mecanismo tiene un impacto sobre las formas de política y gestión del agua en desarrollo que están siendo implementadas a nivel planetario, mirando particularmente a las consecuencias de dichos procesos, así como también a las alternativas potenciales para confrontar el rápido crecimiento de prácticas y discursos inhumanos y antidemocráticos en relación con los procesos de control y acumulación del agua. Dentro de este marco, el presente número, organizado por la Dra. Karina Kloster, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), incluye cuatro artículos que son producto de investigaciones en curso sobre violencias e injusticias conectadas con el agua identificadas en Brasil, Guatemala y México. Muchos de estos eventos son el resultado de actividades criminales realizadas por fuerzas de seguridad gubernamentales, grupos ilegales y otros actores violentos, que frecuentemente trabajan conjuntamente para imponer la apropiación de tierras, aguas y otros recursos pertenecientes a comunidades rurales, indígenas y campesinas. El número es una contribución importante a los debates sobre el tema. Deseamos a nuestros lectores una experiencia fructífera.

José Esteban Castro

Editor General

Presentación de la Organizadora del número

Existe cada vez más evidencia que estamos ante una crisis civilizatoria. Resulta difícil poner en duda las altas tasas de irracionalidad y violencia con las que se reproduce en la actualidad el orden social imperante. Tampoco podríamos negar la evidencia cada vez más contundente acerca de que el aumento de la capacidad productiva capitalista ha traído como consecuencia la introducción de tecnologías altamente destructivas de su base material, no sólo de las relaciones sociales preexistentes, sino de la propia naturaleza de la que se alimenta. Entre otros ejemplos ampliamente conocidos, pueden mencionarse el agotamiento de bosques y selvas, la destrucción de regiones completas de bancos de corales en el mar, la contaminación y desaparición de fuentes de agua, la contaminación del aire, la reducción de la biodiversidad o el saqueo de los yacimientos mineros metálicos y no metálicos. Estos y otros muchos procesos, que amenazan ser fatales para la continuidad de la vida en el planeta, cuyas posibles consecuencias negativas parecían muy distantes hasta hace pocas décadas, con intensidad creciente impactan la vida cotidiana de las personas y son indicadores innegables de que los modos de reproducción del orden social imperante son inviables. En el marco de estos desequilibrios socioambientales gestados por el modo de producción capitalista, crecientemente se verifica una intensificación del uso de la violencia como modo de subordinar a las poblaciones locales, particularmente en los territorios con recursos productivos, a los procesos de acumulación fundados en la expropiación, expoliación, desplazamiento e incluso aniquilación de las comunidades y, en particular, de los actores movilizados en defensa de los territorios, el agua y las condiciones de vida.

Como contribución al esfuerzo de comprender con mayor rigurosidad estos procesos, en este número buscamos caracterizar las formas violentas de organización social que promueven la destrucción ambiental y del ciclo sustentable del agua, incluyendo las formas de violencia con las que se reprime a quienes resisten el avance de esta verdadera empresa de la muerte. Nuestro objetivo es contribuir en la construcción de conocimiento que nos permita defender y desarrollar formas sociales capaces de transformar esta realidad. El Artículo 1, a cargo de Hugo Belarmino de Moraes, titulado "Cercamento das águas e acumulação primária permanente: a Barragem de Acauã e o novo caminho das águas no Estado da Paraíba", visibiliza cómo la construcción de presas en el nordeste brasileiro forma parte de una acumulación que produce despojo para la mayoría de los habitantes de esa región. Por su parte, el Artículo 2, por Ana Pohlenz de Tavira, "Despojo y violencia contra pueblos Chuj en Guatemala por imposición de hidroeléctricas" muestra cómo la utilización de la violencia contra quienes se oponen a estos megaproyectos forma parte del *modus operandi* por medio del cual gobiernos, empresas multinacionales e instituciones financieras imponen la construcción de estas infraestructuras en los territorios. El Artículo 3, de Myriam Fracchia Figueiredo, aborda "El exterminio selectivo de los ambientalistas en México (enero 2017-abril 2019)", presentando un análisis de las formas sistemáticas de "exterminio selectivo" implementadas por fuerzas de seguridad, grupos ilegales y otros actores contra los activistas sociales que luchan por la defensa de las tierras, los bosques, las aguas y las condiciones de vida de sus comunidades. Por último, en el Artículo 4 Mariana Betzabeth Pelayo Pérez trata el tema "De la resistencia a la gobernanza clandestina. Violencia y transformación ecoterritorial en la construcción de la Presa Hidroeléctrica 'El Cajón', Nayarit, México", que examina las profundas transformaciones ecológicas,

culturales, socioeconómicas y políticas que tienen lugar en una pequeña población por causa del violento proceso de expropiación del territorio introducido por la construcción de una presa hidroeléctrica, cuyo objetivo oficial era contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en la región.

En suma, los artículos que componen este número integran aspectos teóricos y empíricos en el análisis de situaciones concretas que se producen en Brasil, Guatemala y México y tienen el objetivo de contribuir a una mayor comprensión de los procesos de despojo social y ambiental en los que la violencia constituye el principal mecanismo de reproducción del orden social imperante.

Karina Kloster

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Ciudad de México, México

Artículo 3

El exterminio selectivo de los ambientalistas¹ en México (enero 2017-abril 2019)²

*Myriam Fracchia Figueiredo*³, Servicio Paz y Justicia América Latina (SERPAJ), México

Resumen

El creciente proceso de violencia en México, fruto de la interpenetración de lo que denominamos “orden delictual” y “orden legal” en la construcción del monopolio del narcotráfico, por lo menos desde el año 2006, tiende a ocultar el histórico proceso de exterminio selectivo de activistas sociales, entre ellos, los ambientales. Este artículo presenta resultados preliminares de una investigación sobre eventos de exterminio selectivo registrados por la prensa entre enero de 2017 y abril de 2019. El objetivo del trabajo es hacer visibles algunas características del proceso de violencia que causa los costos humanos más graves – muerte, desaparición o heridas, incluyendo torturas y violaciones – sufridos por quienes luchan por el agua, la tierra, el bosque o para impedir la construcción de megaproyectos, incluyendo la minería, que afectan los derechos colectivos de las comunidades, particularmente indígenas y campesinas.

Palabras clave: conflictividad social; exterminio selectivo; costo humano; ambientalistas; México.

Recibido: junio de 2019

Aceptado: febrero de 2020

1 En este artículo nos referimos indistintamente a “ambientalistas” o a “militantes ambientales”, defensores del medio ambiente.

2 El trabajo presenta resultados del proyecto “Procesos productivos, agua y violencia en América Latina (2018-2021)”, dirigido por la Dra. Karina Kloster, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

3 E-Mail: myrfracchia@gmail.com

Abstract

The growing process of violence in Mexico 2006 that is a result of the interpenetration of what we call "criminal order" and "legal order" in the construction of the drug trafficking monopoly, since at least 2006, tends to hide the historical process of selective extermination of social activists, including environmental activists. This article presents preliminary research results covering events of selective extermination recorded by press between January 2017 and April 2019. The objective of the paper is to make visible some characteristics of the process of violence that causes the gravest human costs – death, disappearance, or injuries, including torture and rape – suffered by those actors involved in struggles over water, land, forests or to prevent the construction of megaprojects, including mining, which affect the collective rights of their communities.

Keywords: social conflicts; selective extermination; human cost; environmentalists; Mexico.

Received: June 2019

Accepted: February 2020

*"Los pueblos están de luto,
porque falta un compañero.
Dicen que lo asesinaron
porque le tuvieron miedo.
Samir Flores Soberanes,
lo sabes con mucho honor,
nunca dejó al mal gobierno,
por eso se lo enfrentó.
Con todo y documentos,
a los pueblos defendió".*

*Alumnos de segundo grado, Escuela Secundaria "Samir Flores Soberanes"*⁴

Introducción

Este trabajo se propone dar visibilidad a las características del proceso de exterminio selectivo que sufren los militantes ambientales en México. Dicho proceso se enmarca dentro del creciente costo humano sufrido por la población del país por lo menos desde el año 2006, cuando el entonces Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (2006-2012), del Partido de Acción Nacional (PAN), implementó una política de seguridad pública que denominó la "guerra contra el narcotráfico". La magnitud de la violencia desatada por dicha "guerra" ha tendido a ocultar el proceso histórico de "exterminio selectivo" que el Estado mexicano practica contra aquellos actores, por ejemplo los militantes ambientales, que obstaculizan los intereses de los sectores políticos, económicos y sociales que componen la estructura de poder. El artículo toma como objeto de observación hechos registrados entre enero de 2017 y abril de 2019, período que incluye la histórica transición entre la gestión del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la llegada al poder del Presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2022), del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en diciembre de 2018.

Partimos de considerar la violencia como una dimensión del orden social en cuanto es un instrumento de poder que actúa sobre los cuerpos para someterlos a su voluntad. En el estudio que aquí presentamos, se registraron bajas humanas producto de la violencia ejercida para frenar las luchas de militantes ambientales que procuran defender a sus pueblos y comunidades de los impactos negativos de procesos que afectan sus condiciones de vida, como la contaminación y destrucción causadas por actividades extractivistas. El examen de estos procesos nos ha conducido a formular varios interrogantes, que intentamos responder a lo largo de este escrito: ¿cuáles son las características de este proceso de exterminio selectivo de los militantes

⁴ Oropeza (2020).

ambientales? ¿qué tipos de bajas humanas se registran? ¿quiénes son estos militantes ambientales?, es decir, ¿cuáles son sus identidades sociales y cuáles son las luchas que realizan? ¿quiénes son los que infligen dicho costo humano sobre los ambientalistas? Y finalmente, ¿qué relación existe entre quienes causan las bajas humanas y los militantes ambientales que las padecen?

En la primera sección abordamos el marco teórico-conceptual y metodológico empleado, mientras que en la segunda brindamos el contexto general en el que se enmarcan los hechos de violencia considerados. La tercera sección presenta los resultados de la investigación y la cuarta discute los principales hallazgos, en relación con los objetivos y preguntas planteados. Las Conclusiones presentan una síntesis de los puntos principales.

El enfoque de la investigación

El innegable y prolongado proceso de violencia que atraviesa México ha ameritado la producción de estudios cuya mayoría tiene como principal referente empírico la tasa de homicidio (Guerrero, 2020; Madrazo *et al.*, 2017). Para algunos de estos autores, la violencia es expresión de una guerra en el país y de la existencia de un Estado fallido, infiltrado por la delincuencia (Kent, 2020; Solís *et al.*, 2018; CASEDE, 2016). Moriconi advierte que “la legalidad dejó de ser efectiva como medio político” y asume el concepto de órdenes criminales, que se caracterizan por la difuminación de las fronteras entre legalidad y criminalidad, lo que explica que:

los mercados ilegales se han convertido en fuente de bienes y servicios, protecciones y resoluciones de conflicto muchas más efectivas que el Estado de derecho [...]. Poco tiempo atrás, se creía que el crimen estaba relacionado con un orden paralelo distinto del estatal. Si el Estado era el orden, lo legítimo y legal, el crimen era todo lo contrario. Pero en la actualidad no hay gran diferencia entre el comportamiento predatorio de las mafias y el de los grupos financieros (Moriconi, 2018: 121-122).

Este enfoque es coincidente con el que realiza Rita Segato, quien también recurre a la tasa de homicidio, como el indicador de la violencia que asola a América Latina, y sostiene que “el mundo vive en un contexto de guerra permanente, de tipo no convencional” Segato (2014: 342). Para su análisis, considera dos dimensiones: en primer lugar, la dualidad del Estado, que, citando a Herfried Münkler, disuelve “el antiguo límite claramente trazado entre la violencia permisible en las acciones de guerra y la violencia criminal” debido a que ha habido una “transferencia del control de la guerra de ejércitos de Estados nacionales a bandas comerciales pertenecientes a señores de la guerra” (Münkler, citado en Segato, 2014: 343 y 346). En segundo lugar, el cambio del paradigma territorial, en donde el territorio está dado por los cuerpos debido a que

la economía de mercado tiende a liberar a los sujetos de un territorio vinculado al Estado y a producir poblaciones y territorialidades

organizadas en red que atraviesan e interactúan con la jurisdicción estatal, pero que no coinciden completamente con ella (Segato, 2014: 349).

Estas redes pueden ser “de tipo empresarial-corporativas, político-identitarias, religiosas, bélico-mafiosas” y “se comportan como liderazgos para-estatales, co-existiendo con Estados nacionales en el control de las poblaciones” (*Id.*: 350). De esta manera,

el cuerpo inscripto como territorio [...] es precondition de las guerras no convencionales...el poder actúa en este estadio directamente sobre el cuerpo, y es por eso...que los cuerpos y su ambiente espacial inmediato constituyen...el campo de batalla de poderes en conflicto...y pasa a constituir, en sí mismo, terreno-territorio de la propia acción bélica (*Id.*: 352).

Completando su análisis, Segato argumenta que “el crimen organizado es hoy un continente en expansión”, que realiza una interminable serie de negocios ilícitos y se constituye como un “Segundo Estado”, que, como tal, cuenta “con fuerzas de seguridad propias, es decir, corporaciones armadas ocupadas en proteger para sus ‘dueños’ la propiedad sobre la riqueza incalculable que en ese universo se produce y administra” (*Id.*: 317, 358).

Esta última aproximación a la caracterización del fenómeno de la violencia y de la relación entre el Estado y el crimen organizado, tiende un puente hacia el enfoque que hemos desarrollado en el estudio que aquí presentamos. Nuestro enfoque se enmarca en una larga tradición de estudios sobre procesos de violencia social liderada por Juan Carlos Marín, quien sistematizó y operacionalizó una serie de aportes clásicos incluyendo los de Karl Marx, Max Weber, Norbert Elias, Elías Canetti, Jean Piaget y Michel Foucault (Fracchia *et al.*, 2018). En ese marco, desde nuestra perspectiva, concebimos a la violencia como una dimensión del orden social, en cuanto supone un instrumento de imposición de poder hacia el otro para someterlo a su voluntad: “el poder se ejerce sobre relaciones sociales” (Marín *et al.*, 2010: 48) y, como tal, se realiza a través de acciones sobre los cuerpos humanos, produciendo bajas, en un determinado espacio geográfico, con efecto sobre el conjunto de las relaciones sociales que dichos cuerpos representan. Por ello, “la constitución de los cuerpos y su análisis no puede hacerse al margen de los procesos de formación del poder social y, en ese sentido, se puede afirmar que el cuerpo es uno de los territorios de las luchas sociales”; de este modo, “lo que define a la violencia, aun en sus expresiones más simbólicas, siempre será algún tipo de alteración sobre el cuerpo humano” (*Id.*: 21). Es así como los cuerpos vulnerados, en nuestro caso, el de los ambientalistas en México, son expresión de confrontaciones de poder, considerando que sus cuerpos están insertos “en un conjunto de relaciones sociales que lo[s] estructuran y moldean” (*Id.*: 28). Las acciones de lucha de estos activistas sociales son generalmente de resistencia. En este sentido, Karina Kloster argumenta que

tanto [Max] Weber como [Karl von] Clausewitz, elaboran su concepto de relación social de lucha en el sentido de que hay una

determinación, de parte de un individuo, de oponer resistencia (desobediencia) [...] el proceso de lucha social tiene como efecto disparador el momento defensivo que tiende a expresarse en un pasaje al acto de resistencia, de defensa de los recursos o de los derechos que se suponen propios (Kloster 2016: 33, 41).

En relación con lo anterior, nuestro estudio consideró central observar la identidad social de los ambientalistas desde dos dimensiones: las acciones que permiten su reproducción social y el principal tipo de lucha que llevaba a cabo en el periodo en que fue objeto de una baja humana, a raíz de que “la identidad social se construye en la acción” y de que el análisis de “la lucha social no puede ser escindida del análisis de la identidad social de clase” en tanto “la determinación de la lucha de un sector de la sociedad se expresa y realiza a partir de acciones de confrontación social” (Kloster, 2016: 27-28).

Para estudiar las bajas recibidas por los ambientalistas, retomamos la advertencia de Juan Carlos Marín de que,

[s]i analizamos los cuerpos como territorialidades sociales podemos observar en ellos la violencia que produce la construcción y destrucción de relaciones sociales. Podemos observar la relación entre cuerpos y sociedad en los cuerpos mismos [...] como un instrumento de registro de las relaciones de poder. [El proceso] “puede asumir una dirección que apunte a fortalecer las relaciones sociales dominantes o bien puede direccionarse aleatoriamente, hacia la construcción de tipos de relaciones sociales aún desconocidos” (Marín *et. al.*, 2010: 34, 35).

En esta perspectiva, nuestra investigación en curso intenta caracterizar el entramado de relaciones sociales involucradas en el ejercicio de la violencia sistemática contra líderes sociales en México. En este trabajo enfocamos el caso concreto de los líderes y militantes ambientales.

Los militantes ambientales

La simultaneidad de una crisis ambiental y social a nivel global, caracterizadas por “la estrecha relación existente entre las relaciones que los seres humanos establecen entre sí en la producción de sus condiciones de vida, y las que como especie establecen con el conjunto del mundo natural” (Pérez, 2011), explica el surgimiento del ambientalismo desde la década de 1960. Este es un “movimiento en torno a las condiciones, cambios, defensa y protección del medio ambiente y la naturaleza” (Suárez *et al.*, 2002: 361), que nace ante la expansión del sistema productivo capitalista y sus impactos negativos sobre los ecosistemas y los seres vivos. En el contexto actual, la respuesta del ambientalismo ante la crisis global ha adquirido características de confrontación creciente, ya que la defensa del medio ambiente y de la naturaleza se presenta como un obstáculo a los poderosos intereses vinculados con las redes legales e ilegales de ejercicio de la violencia. En nuestro estudio de la violencia ejercida contra líderes y militantes sociales en México, el caso de los militantes ambientales ha comenzado a tomar una

importancia creciente en años recientes. Tomando en cuenta las características que asume el proceso en México, para analizar las bajas sufridas por los ambientalistas y desentrañar su identidad social nos hemos concentrado en una de las corrientes del movimiento, el ecologismo, cuyo objetivo ha sido definido como “la consecución del control comunitario de la gestión del espacio [...] incorpora un componente básico de denuncia que implica [...] interpretar el deterioro del medio como un agravio injusto y reivindicar derechos considerados como propios” (Martín Crespo, citado en Suárez *et al.*, 2002: 349). Esta postura “va más allá de una mera aplicación de soluciones técnicas a los problemas ecológicos, en la medida que promueve la consideración del compromiso social y comunitario” (*Id.*: 362) y se relaciona también con otras formas de activismo.

Metodología

En este marco, nuestro estudio tomó como punto de partida la observación de acciones de violencia contra activistas ambientales que han producido bajas humanas graves, incluyendo los impactos de torturas, heridas, desapariciones y muerte. Consideramos que las bajas producidas constituyen uno de los indicadores del conjunto de relaciones sociales que se trata de destruir mediante el ejercicio de dichos procesos de violencia sistemática y exterminio selectivo. Sobre la base de nuestra estrategia teórico-metodológica, construimos una base de datos sobre el costo humano infligido a los activistas ambientales en México. Los datos fueron contruidos a partir de un registro hemerográfico de noticias⁵ que incluyen 38 hechos de violencia contra activistas ambientales. El registro cubre un período de 840 días, entre enero de 2017 y abril de 2019, e incluye noticias publicadas en su mayoría por el periódico La Jornada y por otras fuentes como Sin Embargo y la Revista Proceso. Las noticias fueron la unidad de observación y la unidad de análisis fueron las acciones identificadas que provocaron bajas en los activistas ambientales. Esta estrategia nos permitió hacer observables aspectos del proceso de producción de bajas entre los activistas ambientales, que si bien forma parte del proceso global de violencia contra líderes y activistas sociales en México, consideramos que debe ser visibilizado y no subsumido en el proceso más general. El estudio nos permitió no solamente visualizar los tipos de bajas que resultan de las acciones de violencia, sino también la identidad social de los ambientalistas vulnerados, los tipos de lucha que realizan, la identidad social de quienes realizan las acciones de violencia, así como también aspectos de la temporalidad y espacialidad de estas acciones. Cabe destacar que el período cubierto por el registro hemerográfico incluye el proceso electoral conectado con las elecciones de julio de 2018, que marcaron el fin de una sucesión de gobiernos de los partidos PAN y PRI, que como señalamos antes han sido vinculados con la escalada de violencia sufrida en México por lo menos desde el año 2006. En las elecciones de 2018, en las que se renovaron la Cámara de

⁵El equipo de investigación del que formo parte es consciente de las limitaciones que tiene el uso de noticias publicadas por la prensa como fuente de información, pero consideramos que esta fuente contribuye a captar el desenvolvimiento de procesos en acción, que tardan un cierto tiempo en constituirse en un objeto de estudio consolidado con investigaciones más detalladas, por ejemplo a través de estudios de caso u otros métodos. Esto es posible debido a que la prensa en sí misma es “parte de la realidad social, es un actor en ella, y también su reflejo, pero además tiene la doble característica que informa sobre esa realidad” y puede ser procesada, de modo tal que el ordenamiento y la codificación de la información en prensa se transforma en datos procesables para luego pasar a su descripción y análisis (ERACMRI, 1997).

Diputados y la del Senado, fue elegido Presidente Andrés Manuel López Obrador, del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), quien asumió el gobierno con un elevado grado de legitimidad. A continuación ampliamos este y otros aspectos del contexto del estudio.

Contexto de los procesos de violencia en México en el que se insertan los hechos estudiados

En el contexto mundial de transición de un Estado-Nación de corte corporativo hacia el proceso de conformación de un Estado transnacional (Robinson, 2017), desde la década de 1990, México ha sufrido una reestructuración económica orientada a su inserción en un mercado transnacional. Este proceso ha generado

una distribución de ingresos negativa, un crecimiento de la pobreza (más de 60% de la población vive con ingresos que la coloca por debajo de la línea de pobreza), la informalización del empleo, el aumento del desempleo y su dependencia a la economía de Estados Unidos ya que el 80% de sus exportaciones se realiza a aquel país, cuya política se constituye en un obstáculo para el crecimiento local. Se dio, por otra parte, un incremento en la reprimarización de la economía, hacia la explotación del petróleo y minería, el monopolio de tierras por parte empresas transnacionales, así como para cultivos destinados al mercado de la droga, cuya base indígena campesina constituye la masa crítica explotable, junto con todos los desocupados, incluidos urbanos y suburbanos (Kloster y Fracchia, 2018).

En la actualidad, México es uno de los países con mayor desigualdad social en América Latina (CEPAL, 2019) y su tasa de informalidad es mayor al promedio de América Latina y el Caribe (OIT, 2018). En el tercer trimestre de 2019, “todas las modalidades de empleo informal sumaron 31.2 millones de personas [...] 56.5% de la población ocupada”, mientras que la Tasa de Desocupación oficial era del 3.6 por ciento y la de Subocupación del 7.7 por ciento (INEGI, 2019). Informes críticos de las estadísticas oficiales informan que entre 2012 y 2018 “el salario mínimo perdió 11.46% de su poder adquisitivo” y estiman que en 2017 la tasa de desempleo era del 12.4 por ciento (CAM, 2018). Esta breve síntesis de datos genéricos muestra que la reestructuración económica de México ha creado una fuerza de trabajo empobrecida, subordinada como mano de obra cautiva. Ahora bien, esta crisis social está estrechamente vinculada con un ascenso importante de la conflictividad socioambiental en el país, ya que la reestructuración económica está acompañada de

una renovada estrategia de despojo y expropiación de lo común, la cual se expresa en la implantación de un nuevo sistema agroalimentario, en manos de grandes transnacionales, a costa de la exclusión masiva de los pequeños productores rurales; así como por la continuidad, profundización, intensificación y expansión de proyectos encaminados al control, extracción, explotación y mercantilización de bienes comunes naturales (Navarro, 2013: 162).

Este es, en términos generales, el contexto general en el que se desenvuelve el complejo proceso de violencia contra líderes sociales en México, un proceso que

es el resultado de la interrelación y compenetración entre el dominio del orden delictual, que constituye una fuerza armada de carácter ilegal y el dominio del orden legal, en todos los niveles de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, con el uso legal pero muchas veces ilegítimo de la fuerza [...] . De este modo, el estado del poder en el país está caracterizado por la interpenetración entre el orden legal del poder estatal y el orden delictual territorial, cobrando la forma de una compleja guerra civil en el territorio mexicano (Colectivo "Ángela Esperanza", 2014: 155).

El proceso de investigación sobre el costo humano de la "guerra" en México desde la década de 1990, que llevamos a cabo bajo la guía del sociólogo Juan Carlos Marín, nos ha hecho entrever que, desde entonces, en el terreno político el país ha estado atravesado simultáneamente por dos procesos (ERACMRI, 1997, 1998, 1999). Uno de estos ha consistido en una lenta y acumulativa ampliación de la ciudadanía en términos de derechos, de libertades y de opciones políticas que, a través de una participación ciudadana ampliada logró impulsar transformaciones históricas en los arreglos del poder político del país. Como ya indicamos, estas transformaciones incluyeron el desplazamiento del poder del PRI en el año 2000, después de más de 70 años en el poder, el dominio de la alianza liderada por el PAN entre 2001 y 2012, el retorno del PRI entre 2012 y 2018, y la llegada al poder en 2018 del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena recordar nuevamente aquí que los datos utilizados para nuestro estudio reflejan eventos que tuvieron lugar durante este último periodo electoral, lo cual es muy pertinente para intentar captar las interrelaciones entre esos dos procesos que, históricamente, se han desarrollado paralelamente, el de la ampliación de derechos y la apertura política, por una parte, y el de exterminio selectivo de líderes y activistas sociales, por la otra. Este último se realiza de manera constante, en condiciones de impunidad, unilateralidad de la acción y desarme de las víctimas, y es dirigido contra determinadas identidades sociales que encabezan acciones de lucha social, como los activistas ambientales (Colectivo "Ángela Esperanza", 2014: 153-4).

Durante la década de 1990, según nuestras investigaciones, ese proceso se había dirigido sobre todo hacia los líderes indígenas y campesinos de los estados del sur de México: Guerrero, Oaxaca y Chiapas (ERACMRI, 1997; 1998; 1999). En el marco de las transformaciones antes mencionadas, ocurridas desde el año 2000, el proceso de exterminio selectivo tendió a quedar invisibilizado y subsumido en el proceso de exterminio masivo que cobró vigor desde el año 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, declaró "la guerra al narcotráfico". Los datos de esa "guerra" son contundentes, a pesar de que la información oficial no refleja enteramente la realidad: entre 2006 y 2019 se registraron cerca de 275,000 muertos, más de 61,000 personas desaparecidas, más de 3,600 fosas clandestinas y un número desconocido de desplazados internos estimado como mínimo en más de 300,000 personas (Velázquez Moreno, 2017; Díaz Pérez y Romo Viramontes, 2019; Pérez Vázquez, *et al.*, 2019;

Encinas, 2020). La política de seguridad implementada desde 2006 a la vez profundizó “expandió cualitativamente” el proceso de exterminio, ya que

se ha expresado como acción de “militarización de la seguridad pública” [que] ha implicado la aparición no sólo de fuerzas combinadas (Fuerzas Armadas militares regulares y cuerpos policíacos), de fuerzas armadas del delito organizado, sino también la de grupos armados irregulares (paramilitares y parapoliciales) y grupos de civiles armados para la autodefensa. Este proceso de extensión cualitativa de la guerra es inocultable (Colectivo “Ángela Esperanza”, 2014: 153-4).

En relación con el caso específico de la violencia contra militantes ambientales, en 2018 México fue identificado como el sexto país más peligroso en el mundo para los militantes ambientales por la organización internacional Global Witness, que registró 14 ambientalistas asesinados durante ese año (Global Witness, 2019). Esta tendencia fue confirmada por numerosas investigaciones durante el período cubierto por nuestro estudio, que indican la existencia de más de 400 ataques contra militantes ambientales que defienden los territorios, los bosques y las aguas contra el avance de actividades extractivistas en México (BIP 2017; Leyva Hernández et al. 2018; Castellanos *et al.* 2018; Velázquez Hernández, 2020). Este elevado costo que pagan los militantes ambientales en México es confirmado por los resultados preliminares de nuestra investigación, que presentamos a continuación.

El costo humano que pagan los ambientalistas en México

Presentaremos ahora los principales hallazgos de la investigación acerca de las características del proceso de exterminio selectivo sufrido por los ambientalistas en México, tomando como base nuestros registros de acciones que tuvieron lugar entre enero de 2017 y abril de 2019, con la finalidad de visibilizar su proceso constituyente. Durante este periodo hemos registrado un total de 104 acciones con bajas humanas que afectaron a activistas sociales en general, de las cuales 38 (37%) fueron dirigidas contra los ambientalistas. Las acciones registradas se llevaron a cabo en 11 estados del país, ubicados las regiones Norte, Centro y Sur⁶. Reiteramos que en las “bajas humanas” hemos tomado en cuenta las más graves: muerte, desaparición y heridas, que incluyen violaciones y torturas⁷.

Pero ¿quiénes luchan como militantes ambientales en México? Para intentar responder a esta interrogante hemos considerado tanto la identidad social asignada por la prensa a los militantes en los registros identificados, como el tipo de lucha en el que han participado predominantemente (ver Cuadro N° 1). Si bien la cantidad de casos de acciones de exterminio contra militantes ambientales en el Cuadro N° 1 es reducida, por lo cual la información tiene un valor descriptivo más que explicativo, la distribución de los casos marca tendencias significativas, lo que permite sacar conclusiones

6 Región Norte: Chihuahua; Región Centro: Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla; Región Sur: Chiapas, Guerrero, Oaxaca.

7 Como criterio metodológico, para no duplicar registros, en cada hecho hemos tomado en cuenta sólo la forma más grave, cuando el registro incluye varias formas de “baja”.

preliminares que sustentan hipótesis plausibles para nuestra investigación. Por una parte, en relación con su identidad social, la mayoría de los militantes ambientales afectados son indígenas y campesinos, quienes fueron el objetivo de 33 acciones (87%), mientras que en las restantes 5 acciones registradas (13%) la identidad asignada por la prensa es la de “pobladores”, una identidad más difusa, la “sociedad civil”, que identificamos en el Cuadro como “otros”.

Cuadro N° 1. Acciones de exterminio contra activistas ambientales registradas en la prensa, según identidad social de los afectados y tipo de lucha, México (enero de 2017-abril de 2019). En valores absolutos y porcentajes.

Identidad	Indígenas	Campesinos	Otros	Total	% por tipo de lucha
Tipo de Lucha					
Disputa por la tierra	71% (12)	18% (3)	12% (2)	100% (17)	45% (17)
Lucha por el agua	75% (6)	13% (1)	13% (1)	100% (8)	21% (8)
Defensa de los bosques	50% (2)	25% (1)	25% (1)	100% (4)	11% (4)
Contra megaproyectos	83% (5)	17% (1)	-	100% (6)	16% (6)
Contra extracción minera	-	67% (2)	33% (1)	100% (3)	8% (3)
Total	66% (25)	21% (8)	13% (5)	100 (38)	100% (38)

Estos datos confirman que existe una continuidad con los hallazgos de nuestros estudios previos realizados desde la década de 1990: indígenas y campesinos continúan siendo el objeto principal del histórico y tradicional proceso de exterminio selectivo de líderes y militantes sociales en México, aunque el proceso se ha expandido también hacia el resto de la sociedad civil. El patrón se refleja también en el exterminio selectivo de los militantes ambientales. Por otra parte, para la caracterización de la identidad social de los ambientalistas afectados consideramos también el tipo de lucha en el que se encontraban participando, según la información de prensa obtenida, por el cual fueron objeto de los ataques. Desde esa perspectiva, 17 acciones (45%) fueron dirigidas contra activistas involucrados en conflictos por la tierra, mientras que el resto de las acciones tuvieron que ver con activistas vinculados directa o indirectamente con luchas por el agua. En este sentido, 8 acciones (21%) estuvieron directamente relacionadas con conflictos por el agua, pero el agua se encuentra presente también como factor importante en las demás acciones realizadas contra militantes que luchan contra el

impacto de proyectos de infraestructura (6 acciones, 16%), por la defensa de los bosques (4 acciones, 10%) y contra proyectos de extracción minera (3 acciones, 8%). Es de destacar que, con algunas variaciones, los diversos tipos de lucha ambiental mencionados se registraron en las tres regiones del país.

En resumen, como muestra el Cuadro N° 1 la mayoría de las acciones de exterminio que identificamos en los registros de prensa fueron realizadas contra activistas ambientales indígenas (25 acciones, 66%), seguidas de las acciones contra activistas campesinos (8 acciones, 21%). Debe destacarse esta elevada participación de los activistas indígenas, quienes, con excepción de las luchas contra la extracción minera, fueron los más afectados en la mayoría de las acciones de exterminio identificadas: en el 83 por ciento de las luchas contra megaproyectos, el 75 por ciento de las luchas por el agua, el 71 por ciento de las luchas por la tierra y en la mitad de las luchas por la defensa de los bosques. Por su parte, los ambientalistas campesinos participaron en todos los tipos de lucha registrados en los informes de prensa identificados, aunque su frente de lucha más importante ha sido la oposición a la explotación minera, seguida por la defensa de los bosques, las disputas por la tierra, la oposición a megaproyectos y la lucha por el agua. En cuanto a “otros” actores de la sociedad civil, su prioridad en las luchas ha sido la disputa por la tierra, seguida por la lucha por el agua, la defensa de los bosques y la oposición a la extracción minera.

Como comentamos previamente, las acciones de exterminio reflejadas en el Cuadro N° 1 incluyen acciones que han causado “bajas humanas”, aunque en el estudio hemos limitado este concepto a las formas más graves: muerte, desaparición y heridas, que incluyen violaciones y torturas. En este sentido, el análisis de los casos identificados muestra que la ocurrencia de muertes es abrumadora, dando cuenta de 30 de las 38 acciones registradas (79%), seguidas de 6 acciones resultantes en heridas (16%) y 2 casos de desaparición (5%). Estos datos sugieren que el objetivo principal de los ataques realizados contra militantes ambientales es el de provocar su eliminación física, de ese modo generando un impacto sobre sus redes de relaciones sociales comunitarias y familiares. Dado que, como muestra el Cuadro N° 1, los militantes indígenas han sido objeto de 66 por ciento del total de las acciones de exterminio, no es sorpresa que también sean los indígenas quienes han sufrido la mayor cantidad de acciones que provocaron muertes: 21 acciones, 70 por ciento del total de acciones que causaron bajas mortales. El resto de las bajas mortales fueron causadas en acciones contra militantes campesinos (6 acciones, 20%) y otros actores de la sociedad civil (3 acciones, 10%).

Como indican en mayor detalle las Tablas A1-A-3 en el Apéndice, los militantes ambientalistas que fueron afectados por acciones de exterminio letales responden a un amplio rango de identidades sociales. Recordemos que las categorizaciones que hemos hecho entre “tipos de lucha” no son mutuamente excluyentes, ya que una misma lucha frecuentemente incluye varios aspectos y, particularmente, en casi todos los tipos de lucha existe una conexión con los conflictos existentes con el agua. La clasificación toma en cuenta el aspecto más importante en cada caso, según la información identificada en los registros de prensa. Tomando en cuenta esta aclaración, hacemos aquí una breve síntesis. En referencia a **bajas mortales causadas en disputas por la tierra** los principales afectados han sido campesinos (ejidatarios o comuneros⁸), indígenas

8 Términos que definen formas de propiedad social de la tierra establecidos en la Constitución Nacional.

(zapotecas⁹, tzotziles¹⁰, rarámuris¹¹, wixárikas¹²), líderes comunitarios, trabajadores y miembros de la población que participaban en actividades de protesta o resistencia. En casos de **luchas por el agua**, las bajas mortales tuvieron lugar entre representantes de organizaciones de pueblos y comunidades en defensa de las fuentes de agua, como por ejemplo el movimiento de las Comunidades en resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzal y el de la Minera Autlán en la Sierra Negra y el Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular, parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP-CNPA MN), ambos en el Estado de Puebla, el Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común, Estado de Chiapas, la organización campesina municipal por la defensa del agua en la cuenca hidrológica del río Del Carmen, Estado de Chihuahua, la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales, de los Estados de Jalisco, Durango y Nayarit, el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODED), protector de la playa y el río Copalita y el Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), en la región de la Cuenca del Papaloapan, estos dos últimos en el Estado de Oaxaca. Las bajas mortales identificadas con relación a **luchas en defensa de los bosques** correspondieron a líderes comunitarios y pobladores en los estados de Chihuahua, Guerrero y Michoacán. Por su parte, en relación con las **luchas de resistencia contra la realización de megaproyectos** por grandes empresas nacionales y multinacionales, las bajas mortales incluyeron ambientalistas involucrados en protestas contra la construcción de parques eólicos y gasoductos en el Estado de Oaxaca, proyectos extractivos en Jalisco y la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y grandes autopistas conectadas con dicha megaobra en el Estado de México. Por último, con referencia a las **luchas conectadas con actividades de minería**, las bajas mortales registradas correspondieron a diversos actores defendiendo los derechos de los trabajadores y de los habitantes locales contra los impactos de estas actividades en los estados de Guerrero y Oaxaca. Por último, es importante destacar que todas las acciones que han tenido como efecto la desaparición de militantes ambientales tuvo como víctimas a indígenas, mientras que la mayoría de las acciones que causaron heridas y torturas también fueron dirigidas contra indígenas. Indudablemente, la identidad social indígenas es la más golpeada por el proceso del exterminio selectivo que estudiamos.

Ahora bien ¿quiénes son los actores responsables por matar, hacer desaparecer o herir de gravedad a los militantes ambientales? Como hemos señalado más arriba, la violencia en México ejecutada a través de acciones de exterminio selectivo es el resultado de la interpenetración entre dos ámbitos de poder territoriales: el “orden delictual”, constituido por organizaciones y grupos que utilizan una fuerza armada de carácter ilegal, y el “orden legal”, conformado por identidades que representan a los tres poderes que constituyen el Estado: ejecutivo, judicial y legislativo, desde el nivel municipal al federal (Equipo Bourbaki, 2011: 19). Hemos encontrado que ambos dominios territoriales han sido responsables por el costo humano sufrido por los militantes ambientales, aunque no han actuado de la misma manera ni con la misma intensidad (Cuadro N° 2).

9 Etnia indígena, Estado de Oaxaca.

10 Etnia indígena del tronco maya, Estado de Chiapas.

11 Etnia indígena (también conocida como tarahumaras), Estados de Chihuahua, Durango y Sonora.

12 Etnia indígena (también conocida como huicholes), Estados de Nayarit, Zacatecas, Durango y Jalisco.

Cuadro N° 2. Sujetos responsables por las acciones de exterminio selectivo contra militantes ambientales, según el ámbito de poder al que corresponden, destacando acciones con bajas letales, México (enero 2017-abril 2019). En % y valores absolutos

Ámbito de poder	Sujetos	Acciones realizadas	Acciones con bajas letales como % del total en cada Ámbito de poder	
			Acciones con bajas letales	Total de acciones
Orden delictual	Crimen organizado	50% (19)	82% (22)	100% (27)
	Fuerzas armadas ilegales	21% (8)		
Orden legal	Fuerzas armadas legales	8% (3)	73% (8)	100% (11)
	Autoridades gubernamentales	8% (3)		
	Sociedad civil	13% (5)		
Total		100% (38)	79% (30)	100% (38)

Como indica el Cuadro N° 2, en primer lugar, el principal responsable de las bajas humanas ha sido el "orden delictual", que da cuenta del 71 por ciento (27 acciones) del total de las acciones de exterminio (38) identificadas durante el período de estudio. El así llamado "crimen organizado"¹³ fue responsable de la mitad del total de acciones realizadas contra los ambientalistas (50%, 19 acciones), mientras que más de una quinta parte del total de las acciones (21%, 8 acciones) fueron causadas por lo que hemos denominado "fuerzas armadas ilegales"¹⁴, las cuales, sin embargo, en general han actuado juntamente con fuerzas armadas legales. En relación con esto, el "orden legal" también ha tenido una participación importante en la generación de las bajas de los ambientalistas, dando cuenta del 29 por ciento del total de las acciones identificadas (11 acciones.). Los principales actores de este ámbito han sido, por una

¹³ Denominaciones dadas por la prensa a los actores del crimen organizado involucrados en las acciones de exterminio selectivo: "desconocidos"; "hombres armados en camioneta"; "personas vinculadas" a quienes han matado a otros; "posibles talamontes"; "grupo fuertemente armado con armas de alto calibre"; "sicarios"; "pistoleros"; "hombres encapuchados en camionetas"; "vecinos de origen alemán" (tomado de la base de datos de informes prensa).

¹⁴ Denominaciones dadas por la prensa a los actores de las fuerzas armadas y policiales que participaron en acciones ilegales exterminio selectivo: "grupo de choque"; "sujeto encapuchado en moto taxi, policía y paramilitares"; "paramilitares"; "un grupo de habitantes encabezados presuntamente por militantes de Antorcha Campesina" [movimiento creado en la década de 1970 y que desde fines de la década de 1980

parte, "autoridades gubernamentales"¹⁵ y "Fuerzas Armadas legales"¹⁶ (8%, 3 acciones cada una respectivamente) y otros actores que hemos denominado tentativamente "sociedad civil"¹⁷ (13%, 5 acciones), cuyas acciones contra activistas ambientales registradas en nuestra base de datos están relacionadas con conflictos por la tierra.

Como sugiere el Cuadro N° 2, las identidades de los actores responsables por acciones de "exterminio selectivo" de militantes ambientales en México son diversas, lo que en apariencia sugiere una importante fragmentación entre estos sujetos, cuyas actividades podrían parecer más el resultado de un cierto caos impredecible que de acciones planificadas cuidadosamente. Esta apariencia caótica tiende a oscurecer el hecho de que estas acciones siguen el patrón de la estrategia histórica de eliminación de líderes sociales en México, pero además puede tener el efecto de invisibilizar la especificidad de la eliminación selectiva de militantes ambientales, que queda subsumida en el conjunto de víctimas del exterminio masivo que tiene lugar en el país. Nuestra forma de agrupar y conceptualizar a los sujetos responsables de estas acciones en función de los ámbitos de poder social que representan tiene por objeto descartar esa imagen de aparente irracionalidad de los eventos registrados y hacer visible sus patrones y tendencias. En este sentido, el hecho más importante es que mayoritariamente las acciones de exterminio han causado bajas letales: el 82% (22) del total de las acciones realizadas por el "orden delictual" y el 73% (8) del total de las acciones del "orden legal" han causado la muerte de activistas ambientales. En menor proporción, las acciones han causado heridas, incluyendo torturas y violaciones: 11% del total de las acciones del "orden delictual" y 27% de las del "orden legal". Todas las desapariciones de activistas ambientales registradas en nuestra base de datos fueron causadas por el "orden delictual" (7% del total de sus acciones).

A partir de esta evidencia sobre el elevado porcentaje de las bajas letales, el principal tipo de baja sufrida por los militantes ambientales, nos preguntamos por la distribución de estas acciones letales con relación a los distintos tipos de lucha en que se encontraban involucrados los activistas asesinados (Cuadro N° 3).

ha sido vinculado con miembros del Partido Revolucionario Institucional - PRI]; "ganaderos invasores"; "golpeadores afiliados a CTM" [Confederación de Trabajadores de México].

15 Denominaciones dadas en la prensa a autoridades gubernamentales que participaron en acciones ilegales exterminio selectivo: "autoridades de la cabecera municipal"; "personas afines a la alcaldesa priísta" [del PRI]; "sujetos armados que 'salieron de la casa del ex alcalde'".

16 Denominaciones dadas en la prensa a las Fuerzas armadas y policiales legales que participaron en acciones ilegales exterminio selectivo: "elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)"; "policías municipales"; "elementos del Grupo Operaciones Especiales (GOE)".

17 Denominaciones dadas en la prensa a actores de la "sociedad civil" que participaron en acciones ilegales exterminio selectivo: "habitantes", "pobladores del municipio", "supuestos habitantes", "pobladores de la agencia".

Cuadro N° 3. Acciones de exterminio contra militantes ambientales que causaron bajas letales, según el Ámbito de Poder responsable por las acciones, México (enero 2017-abril 2019). En % y valores absolutos

Tipo de lucha	Orden delictual	Orden legal	Total
Disputa por la tierra	56% (9)	44% (7)	100% (16)
Lucha por el agua	100% (6)	-	100% (6)
Defensa de los bosques	100% (3)	-	100% (3)
Contra megaproyectos	67% (2)	33% (1)	100% (3)
Contra extracción minera	100% (2)	-	100% (2)
Total	100% (22)	100% (8)	100% (30)

Como indica el Cuadro N° 3, el “orden delictual” fue responsable por el total de las acciones que produjeron bajas letales en las luchas por el agua, por la defensa de los bosques y en contra de la extracción minera, a lo que se suma una elevada participación en los asesinatos causados en el marco de disputas por la tierra. Por su parte, el “orden legal” ha tenido un alto grado de participación en las bajas letales contra militantes ambientales en el contexto de disputas por la tierra.

Esta síntesis de la información recogida en nuestro estudio preliminar confirma algunas de las características centrales que se identifican en proceso constituyente de exterminio selectivo de militantes ambientales, en el contexto histórico de exterminio de líderes sociales en México. Se destaca la aparente determinación en provocar la eliminación definitiva de los activistas ambientales, sobre todo de indígenas-campesinos y pobladores arraigados al territorio, en todos los tipos de lucha que realizan. También es notorio el papel de los sujetos armados responsables por estas acciones letales, predominantemente de los que representan lo que denominamos “orden delictual”, aunque la participación de actores del “orden legal” también tiene un importante peso, a lo cual debe agregarse el hecho de que, en la práctica, existen importantes interrelaciones entre ambos grupos.

Análisis de los hallazgos

Como ha argumentado William Robinson, crecientemente las luchas ambientales en América Latina, sobre todo las que llevan a cabo los indígenas, no se limitan solamente a la defensa de la tierra ante la expansión de apropiación mercantil, sino que abarcan un rango de temas conectados con sus territorios, luchas por “el control

sobre los recursos, como la tierra, la madera y la minería...el petróleo y el gas natural" y, obviamente también el agua. Esto se da en un contexto en el que los movimientos sociales genéricamente chocan "de frente con la globalización capitalista y sus agentes, incluidas las corporaciones transnacionales de la energía, la minería y la agroindustria y constituyen un desafío frontal al saqueo corporativo trasnacional en América Latina" (Robinson, 2017: 312-313).

En este contexto, los datos de nuestro estudio preliminar contribuyen a iluminar algunas de las características más brutales que asumen estos procesos en el caso mexicano. Los hallazgos acerca de las características del proceso del exterminio selectivo de los militantes ambientalistas en México nos confirman, en primer lugar, su continuidad histórica y la tendencia a su crecimiento en el tiempo, tomando en cuenta los resultados de nuestras investigaciones desarrolladas desde la década de 1990. Una constante que hemos identificado es el peso de la eliminación física como principal tipo de baja causada a los militantes sociales, en este caso activistas ambientales, aunque se detecta también una creciente tendencia a las acciones que tienen como efecto la desaparición los activistas. No es de extrañar que los militantes ambientales estén siendo eliminados a través de ambos tipos de acción, ya que, como indican nuestros estudios previos, una característica principal del proceso de exterminio selectivo es que

aunque ocurre en condiciones de guerra, no es siempre la continuación mecánica de ésta, ya que el objetivo de una guerra no es la eliminación del adversario sino su desarme; mientras que el exterminio obedece a otro tipo de determinación, la cual está encaminada hacia el ataque y no hacia la defensa. En otros términos, se busca eliminar a aquellos que desempeñan un papel preponderante en las luchas sociales, quienes son eliminados de acuerdo con una estrategia cuya base no es la defensa del régimen político, sino la supresión de la crítica al sistema. Esto supone [...] una estrategia distinta, que es la expresión de una política de Estado (Espacio de Reflexión, 1999: 110).

En esta perspectiva, las diferentes luchas que han llevado a cabo los militantes ambientales durante el periodo cubierto en este estudio reflejan en gran medida la existencia de un compromiso comunitario, particularmente de comunidades indígenas y campesinas organizadas para la defensa de la tierra y del agua, de sus bosques, y en contra del desarrollo de proyectos y megaproyectos, incluyendo los de la extracción minera, entre otros procesos que atentan contra sus recursos naturales y sistemas de vida. Las comunidades afectadas se organizan en oposición a la lógica del Estado y de sus aliados locales y transnacionales, que buscan la apropiación de los recursos naturales y el establecimiento de territorios libres de conflictos para la realización de sus negocios, que garanticen la circulación rápida y segura de las mercancías. El exterminio selectivo de los militantes ambientales causándoles bajas letales y desapariciones se ha convertido claramente en la forma preferente utilizada por los sujetos responsables por las acciones registradas, lo cual refleja una determinación de anular la capacidad de confrontación efectiva que demuestran los activistas con relación al avance de los intereses capitalistas representados en la alianza entre el Estado y actores nacionales y transnacionales involucrados.

Ahora bien, aunque los datos obtenidos en el estudio indican que en principio las acciones de exterminio que causan bajas letales afectan a las distintas identidades sociales que participan en el activismo ambientalista y ocurren con relación a los distintos tipos de lucha en las que se involucran, el peso mayor de dichas acciones recae sobre los activistas de origen indígena y campesino, los cuales han sido históricamente los blancos tradicionales del exterminio selectivo de líderes sociales en México. En este período más reciente, sin embargo, también se han sumado a la lista de identidades sociales otros sectores que genéricamente denominamos “sociedad civil”, que incluyen particularmente a pobladores anclados a sus territorios, rurales o urbanos, que se encuentran ubicados en los territorios que son objeto de la expansión de la apropiación mercantil de tierras y de sus recursos naturales, territorio heterogéneos dominados crecientemente por la interpenetración de sujetos correspondientes a los órdenes “delictual” y “legal”, en términos de nuestro análisis. En relación con esto, nos queda como desafío investigar en mayor profundidad cuáles son los intereses económicos, políticos y sociales que se ven confrontados por las diversas luchas ambientalistas identificadas y las consecuentes acciones de exterminio selectivo contra los sujetos que encarnan esas luchas.

Como indicamos al inicio del artículo, durante la década de 1990 la política del exterminio selectivo estaba claramente a cargo del Estado, “mediante la presencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Combinadas, auxiliadas por paramilitares y civiles armados”, como las así llamadas “guardias blancas” (Espacio de Reflexión, 1999: 110). En la época más reciente, todos los sujetos armados del ámbito del “orden legal” persisten en su labor de exterminio. Sin embargo, el peso relativo de esta variedad de sujetos históricos responsables por el proceso de eliminación selectiva de activistas sociales parece encontrarse en franca disminución ante la emergencia de un nuevo sujeto colectivo, organizado, que comparte la propiedad del uso ilegal de las armas: el ámbito de poder del orden delictual, particularmente en la forma del así denominado “crimen organizado”. La prensa en general aporta pocos indicios de la identidad de estos actores, salvo el hecho de que constituyen una fuerza armada. Incluso cuando las acciones de exterminio son causadas, por ejemplo, por los cárteles del narcotráfico, la información que suministra la prensa tiende a ser muy limitada. En resumen, nuestros datos preliminares sobre la eliminación de activistas ambientales confirman hallazgos previos indican que en las primeras décadas del Siglo XXI se ha dado una expansión del ámbito del orden delictual como sujeto responsable por las acciones de exterminio selectivo de activistas sociales (Equipo Bourbaki, 2011). Ahora bien, esa variedad ampliada de sujetos responsables por el proceso del exterminio selectivo puede sugerir que en esta nueva etapa se habría dado un incremento de formas de violencia irracional, caótica, desvinculadas de una estrategia. Sin embargo, nuestro argumento es que la heterogeneidad de los actores responsables por el exterminio en esta etapa más reciente está dada por la creciente diversidad de formas de interacción que existe entre los procesos de dominio territorial en el país, sin dejar de destacar el predominio del orden delictual en dichos procesos. Y en esa direccionalidad que vienen asumiendo estos procesos ha seguido siendo decisiva la acción del Estado.

Conclusiones

Los procesos de exterminio que acabamos de discutir se enmarcan en la severa crisis socioambiental que atraviesa a México, uno de los países con mayor desigualdad social, con un creciente aumento de la economía informal y del desempleo, con una economía basada en la explotación de recursos naturales, notoriamente el petróleo, que se ha reprimarizado y con un proceso de monopolización del control de la tierra acelerado a partir de las reformas históricas introducidas desde la década de 1990 en la Constitución del país, a partir de lo cual se ha expandido la producción de drogas, implantado un nuevo sistema agroalimentario en manos de empresas transnacionales y multiplicado el número de proyectos encaminados al control, extracción, explotación y mercantilización de bienes naturales. Uno de los efectos más devastadores de esta crisis ha sido la generación de una fuerza de trabajo pauperizada como mano de obra cautiva, a la que se suma la masa marginalizada derivada de los desplazamientos forzados en virtud de los ataques armados a las poblaciones. En este sentido, recalcamos el impacto de la grave crisis humanitaria desatada por el doble proceso de exterminio que identificamos en el país. Por un lado, prolongación de las formas históricas de exterminio de carácter masivo sobre la población, incluyendo la tortura, el asesinato, las amenazas, la desaparición de personas y el desplazamiento de poblaciones que contribuye a instalar un contexto de terror social que permite “liberar” territorios para la apropiación de las fuentes de generación de riqueza y la constitución de nuevos mercados. Por otro lado, el proceso de exterminio selectivo, dirigido hacia líderes sociales, periodistas, militantes ambientales, etc., que tiene como objetivo eliminar los focos de crítica al sistema y descabezar las organizaciones populares que se oponen a los intereses del Estado y de sus aliados económicos, políticos y sociales. La continuidad histórica de este proceso en la aplicación de estrategias político-militares sobre el territorio parece ser una constante que atraviesa los diversos signos políticos que han gobernado el país, en sus diversos niveles.

La evidencia que hemos ido recogiendo en nuestras investigaciones pareciera indicar que el doble proceso de exterminio que se ciñe sobre el país se relaciona con la conversión de la función del Estado, que se confronta con la contradicción de tener que garantizar su continuidad como Estado de derecho y a la vez imponer al conjunto de la población los intereses locales y transnacionales empresariales y financieros aliados a la clase política. Posiblemente, los procesos de exterminio selectivo en marcha discutidos en este trabajo son indicadores de la conformación de condiciones monopólicas para la producción y circulación ilegal de mercancías también ilegales, condiciones que requieren que el “orden legal” traspase la ejecución de tareas de exterminio a las fuerzas armadas ilegales. Es decir, en esta perspectiva estamos experimentando la transformación de las funciones del Estado, transición en la que el orden delictual, subordinado pero en estrecha colaboración con el orden legal, se ha convertido en una condición necesaria para el proceso de reordenamiento social. En ese contexto, como argumenta Segato (2014), los cuerpos constituyen la territorialidad social en donde se realiza la guerra, que se concretiza en las bajas resultantes del ejercicio del poder político-militar. Nuestro análisis de la evidencia de casos de violencia ejercida contra los militantes ambientales ilustra un aspecto crecientemente central de dicho proceso: en México, ese poder se ejerce a través del exterminio selectivo de estos activistas, particularmente indígenas, pero también campesinos y pobladores urbano-rurales arraigados en sus territorios, con el fin de desarticular sus luchas de resistencia contra el avance de los procesos de expropiación de sus condiciones materiales de vida, su

cultura y su identidad social. Estos eventos de extrema violencia sistemática contra los activistas ambientales forman parte de los procesos más amplios de destrucción y construcción de relaciones sociales, caracterizan el proceso de reordenamiento social en marcha.

Referencias

Ameglio, Pietro y Myriam Fracchia (2019), "El rostro del 'exterminio selectivo' por la defensa del territorio en la guerra en México", en Mariflor Aguilar Rivero y Laura Echavarría Canto (Coords.), Violencia, Territorio y Extractivismo. Ciudad de México: Ediciones Monosílabo, págs.109-126.

BIP – Brigadas Internacionales de Paz (2017), Defender la Vida. Personas defensoras de la tierra, el territorio y el medioambiente en riesgo. Ciudad de México: BIP. Disponible en: https://pbi-mexico.org/sites/pbi-mexico.org/files/Defender_la_Vida%20ESP_O.pdf. Consultado en diciembre de 2019.

CAM – Centro de Análisis Multidisciplinario (2018), "La depredación de las clases trabajadoras durante el desgobierno de Enrique Peña Nieto. La desigualdad salarial en México es producto de la explotación capitalista", Reporte de Investigación 130. Disponible en: <https://cam.economia.unam.mx/reporte-de-investigacion-130-la-depredacion-de-las-clases-trabajadoras-durante-el-desgobierno-de-enrique-pena-nieto-la-desigualdad-salarial-en-mexico-es-producto-de-la-explotacion-capitalista/>. Consultado en diciembre de 2019.

Castellanos, Laura (2018), "Estos 108 mexicanos fueron asesinados por defender nuestros bosques y ríos", Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), 5 de diciembre de 2018. Disponible en: <https://www.ocmal.org/estos-108-mexicanos-fueron-asesinados-por-defender-nuestros-bosques-y-rios/>. Consultado en diciembre de 2019.

CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019), Panorama Social de América Latina. Santiago de Chile: CEPAL. Disponible en: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/44969-panorama-social-america-latina-2019>. Consultado en diciembre de 2019.

Colectivo "Angela Esperanza" (2014), "El estado de la guerra en México hoy", Cuadernos de Marte, Vol. 5, N° 6, págs. 153-173. Disponible en: <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/205/180>. Consultado en diciembre de 2019.

CASEDE – Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (2016), Atlas de la Seguridad y la Defensa de México. Ciudad de México: CASEDE.

Díaz Pérez, María Cristina y Raúl Romo Viramontes (2019), La Violencia como Causa de Desplazamiento Interno Forzado. Aproximaciones a su análisis en México. Ciudad de México: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Disponible en: https://mexico.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Completo_Desplazados_impreso_20_03_19.pdf. Consultado en diciembre de 2019.

Encinas, Alejandro (2020), "Informe de fosas clandestinas y Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas", Informe del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación de México. Ciudad de México, 6 de enero de 2020. Disponible en: <https://youtu.be/7f6qYLLf4DE>. Consultado en enero de 2020.

Equipo Bourbaki (2011), "El costo humano de la guerra por la construcción del monopolio del narcotráfico en México (2008-2009)", Cuadernos de Marte, Vol. I, N° 1, págs. 295-446. Disponible en: <http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/2043/1744>. Consultado en diciembre de 2019.

ERACMRI – Espacio de Reflexión y Acción Conjunta contra la Militarización, Represión e Impunidad (1997), "¿Proceso de militarización? ¿Democracia con exterminio?", Documentos Sociopolíticos, N° 1. Ciudad de México: ERACMRI.

ERACMRI – Espacio de Reflexión y Acción Conjunta contra la Militarización, Represión e Impunidad (1997), "Conflictividad Social en México 1994-97. Costo humano de las luchas sociales", Cuadernos de Reflexión y Acción Noviolenta, N° 1. Ciudad de México: ERACMRI.

ERACMRI – Espacio de Reflexión y Acción Conjunta contra la Militarización, Represión e Impunidad (1998), "La cuesta de la guerra: recomposición del sistema mexicano", Cuadernos de Reflexión y Acción Noviolenta, N° 2. Ciudad de México: ERACMRI.

ERACMRI – Espacio de Reflexión y Acción Conjunta contra la Militarización, Represión e Impunidad (1999), "El costo humano de la conflictividad social en México". En coautoría con Colectivo "Pensar en Voz Alta", Cuadernos de Reflexión y Acción Noviolenta, N° 3. Ciudad de México: ERACMRI.

Fracchia, Myriam, Márgara Millán, Karina Kloster, Pietro Ameglio y José Miguel Candia (Eds.) (2018), Antología del Pensamiento y Obra de Juan Carlos Marín. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Plaza y Valdéz.

Global Witness (2018), "¿ENEMIGOS DEL ESTADO? De cómo los gobiernos y las empresas silencian a las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente". Disponible en: https://www.globalwitness.org/documents/19767/Enemigos_del_Estado_ZjmrXWS.pdf. Consultado en diciembre de 2019.

Guerrero, Eduardo (2018), "La segunda ola de violencia", Nexos, 1 abril 2018. Disponible en: <https://www.nexos.com.mx/?p=36947>. Consultado en septiembre de 2020.

INEGI – Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2019), "Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Cifras durante el Tercer Trimestre de 2019". Ciudad de México: INEGI. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/enoe_ie/enoe_ie2019_11.pdf. Consultado en diciembre de 2019.

Kent, Daniel (2019), "El misterio de la guerra en México", Nexos, 1 de febrero de 2019. Disponible en: <https://www.nexos.com.mx/?p=40971>. Consultado en septiembre de 2019.

Kloster, Karina y Myriam Fracchia (2018), "La deuda pendiente: el fin de la guerra en México", Revista MXPolítico, 8 de junio de 2018, págs. 1-3. Disponible en: https://www.academia.edu/36839600/la_deuda_pendiente_el_fin_de_la_guerra_en_México_MX_POLITICO_JUNIO_2018_pdf. Consultado en septiembre de 2019.

Kloster, Karina y Myriam Fracchia (2017), "El costo humano en la construcción de los

dominios territoriales”, en Karina Kloster (Coord.) (2017), Conflictividad y Violencias en América Latina. Ciudad de México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), págs. 229-264.

Kloster, Karina (2016), Las Luchas por el Agua en México. Ciudad de México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM).

Leyva Hernández, Alejandra, Cristina García Bravo y José Carlos Juárez Pérez (2018), “Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales”. Ciudad de México: Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., (CEMDA). Disponible en: https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/Informe_defensores.pdf. Consultado en diciembre de 2019.

Madrazo, Alejandro, Jorge Romero y Rebeca Calzada (2017), “Los combates: La ‘guerra contra las drogas’ de Felipe Calderón”, Nexos, 1 de abril de 2017. Disponible en: <https://www.nexos.com.mx/?p=31818>. Consultado en septiembre de 2019.

Marín, Juan Carlos, Gustavo Forte, Verónica Pérez, Gustavo Antón, Franco Damiano, Damián Pierbattisti, Jorge Cresto, Claudia Salud, Leila Abduca y Juan Miguel Ainora (2010). El Cuerpo, Territorio del Poder. Buenos Aires: Ed. P.I.Ca.So.

Moriconi, Marcelo (2018), “Desmitificar la corrupción. La perversidad de su tolerancia... y de su combate”. Revista Nueva Sociedad, N° 276, págs. 118-128. Disponible en: https://nuso.org/media/articles/downloads/6.TC.Moriconi_276.pdf. Consultado en diciembre de 2019.

Navarro, Mina (2013), “Luchas por lo común contra el renovado cercamiento de bienes naturales en México”, Bajo el Volcán, Vol. 13, N° 21, 2013, págs. 161-169. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/286/28640302008.pdf>. Consultado en diciembre de 2019.

OIT – Organización Internacional del Trabajo (2018), Mujeres y Hombres en la Economía Informal: Un panorama estadístico. Tercera edición. Ginebra: OIT. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_635149.pdf. Consultado en diciembre de 2019.

Olivares, Emir (2019), “Defender el ambiente, actividad de peligro mortal en México”, La Jornada, 30 de julio de 2019, pág. 31, Ciudad de México.

Oropeza, Daliri (2020), “A un año del asesinato de Samir: ni justicia ni obras”, 21 febrero de 2020, Pie de Página. Disponible en: <https://piedepagina.mx/a-un-ano-del-asesinato-de-samir-ni-justicia-ni-obras/>. Consultado en febrero de 2020.

Pérez Vázquez, Brenda Gabriela, Lúgia de Aquino Barbosa Magalhães y Montserrat Castillo Portillo (2019), Entre la Invisibilidad y el Abandono: un acercamiento cuantitativo al desplazamiento interno forzado en México, Ciudad de México: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF). Disponible en: <http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-entre-la-invisibilidad-y-el-abandono-acercamiento-cuantitativo-al-desplazamiento-interno-forzado-en-mexico.pdf>. Consultado en diciembre de 2019.

Pérez Verdi, Raúl (2011), "Ambientalismo y desarrollo sustentable: tramas del sistema capitalista" LiminaR, Vol. 9, N° 2, págs. 181-199. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-80272011000200012. Consultado en septiembre de 2020.

Robinson, William (2017), América Latina y el Capitalismo Global. Una perspectiva crítica de la globalización. Ciudad de México: Siglo XXI.

Segato, Rita (2014), "Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres", Revista Sociedade e Estado, Vol. 29, N° 2, págs. 341-371. Disponible en: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922014000200003. Consultado en abril de 2019.

Solís, Juan Mario y Marcelo Moriconi (Coords.) (2018), Atlas de la Violencia en América Latina. San Luis Potosí: Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Suárez, Ernesto, Bernardo Hernández y Stephany Hess (2002), "Relación entre activismo proambiental y otras formas de participación social", Psychosocial Intervention, Vol. 11, N° 3, págs. 359-369. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/1798/179818139008.pdf>. Consultado en septiembre de 2020.

Velázquez Hernández, Lucía (2020), "La defensa del ambiente en México, ¿cuestión de vida o muerte?", Diálogos Ambientales, Año 1, N° 1, Ciudad de México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Disponible en: <https://www.gob.mx/semarnat/dialogosambientales/articulos/la-defensa-del-ambiente-en-mexico-cuestion-de-vida-o-muerte>. Consultado en febrero de 2020.

Velázquez Moreno, Ana Laura (2017), Desplazamiento Interno por Violencia en México. Causas, consecuencias y responsabilidades del Estado, Ciudad de México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37820.pdf>. Consultado en diciembre de 2019.

Fuentes hemerográficas

La Jornada versión digital, 2 de enero del 2017 a 27 de abril del 2019. Disponible en: <https://www.jornada.com.mx>. Consultado durante 2017-2019.

Portal Sin Embargo, desde 2017 a 2019. Disponible en: <https://www.sinembargo.mx/>. Consultado durante 2017-2019.

Revista Proceso versión digital, desde 2017 a 2019. Disponible en: <https://www.proceso.com.mx/>. Consultado durante 2017-2019.

Apéndice

Los rostros del exterminio selectivo de militantes ambientalistas en México (enero 2017-abril 2019)

Las Tablas A-1 a A-3 presentan información más detallada sobre los militantes ambientalistas que fueron objeto de algunas de las acciones de exterminio identificadas en los informes de prensa considerados en nuestro estudio.

Tabla A-1. Militantes ambientales que sufrieron heridas, según tipo de lucha, identidad, lugar y fecha de la acción (enero 2017-abril 2019)

Tipo de Lucha	Nombre o descripción de los militantes afectados	Identidad Social, incluyendo datos de entidades u otros	Lugar (Estado, poblado, municipio, etc.)	Fecha
Defensa de bosques	11 activistas en campamento	Campamento permanente de integrantes del colectivo Conciencia Crítica y Acción y del Observatorio Ciudadano de Género, movimiento Abracemos Tollocan, en protesta contra posible tala de unos 175 árboles (entre oyameles, pinos y sauces), para construir un paso vehicular.	Estado de México, Toluca.	11-7-2017
Oposición a megaproyectos	Cuatro ejidatarios y tres policías ministeriales.	Ejidatarios en bloqueo por la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).	Estado de México, Santiago Tepetitlán.	21-7-2017
Oposición a megaproyectos	Ejidatarios	Campesinos en plantón para impedir que los camiones de las empresas constructoras Grupo CIPSA y Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA), y de transportistas afiliados a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) pasen por sus tierras. Medida tomada en oposición a la construcción de la autopista Pirámides-Texcoco, de 13 kilómetros, que pasará por los ejidos de Tocuila, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, La Magdalena, Francisco I. Madero, Atenco, Acuexcomac y Nexquipayac, que conectará varias autopistas con la nueva terminal aérea NAICM.	Estado de México, San Salvador Atenco, Acuexcomac.	11-9-2018
Conflicto Agrario	Dos voluntarios	Trabajadores de campamento Tortuguero.	Oaxaca, Colotepec.	24-4-2019

Tabla A-2. Militantes ambientales desaparecidos, según tipo de lucha, identidad, lugar y fecha de la acción (enero 2017-abril 2019)

Tipo de Lucha	Nombre o descripción de los militantes afectados	Identidad Social, incluyendo datos de entidades u otros	Lugar (Estado, poblado, municipio, etc.)	Fecha
Lucha por el agua Oposición a la minería	Sergio Rivera Hernández, activista .	Integrante del movimiento Comunidades en resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Coyolapa-Atzal y el de la Minera Autlán en la Sierra Negra.	Puebla, Zoquitlán.	23-8-2018
Lucha por el agua	Miembros del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común. 50 desaparecidos, dos heridos, ocho mujeres retenidas.	Plantón por cinco meses frente al Ayuntamiento para exigir la destitución del alcalde Manuel de Jesús Carpio Mayorga (partido político Morena).	Chiapas, Amatlán.	17-1-2019
Lucha por el agua	Personas identificadas con las iniciales RSS, BMB y SG más seis desaparecidos y un herido.	Comuneros zapotecas.	Oaxaca, San Juan Jaltepec.	3-3-2019

Tabla A-3. Militantes ambientales asesinados, según tipo de lucha, identidad, lugar y fecha de la acción (enero 2017-abril 2019)

Tipo de Lucha	Nombre o descripción de los militantes afectados	Identidad Social, incluyendo datos de entidades u otros	Lugar (Estado, poblado, municipio, etc.)	Fecha
Conflicto Agrario	Cuatro pobladores y un policía comunitario	Pobladores y policía comunitario.	Oaxaca, San Juan Juquila Mixe, Guadalupe Victoria.	7-1-2017
Defensa de bosques	Isidro Baldenegro López	Combatía la tala de los árboles de pino y roble de los bosques de la Sierra Madre Occidental, donde habitan los tarahumaras. Premio Goldman en 2005.	Chihuahua, Coloradas de la Virgen, Guadalupe y Calvo.	15-1-2017
Conflicto Agrario	Juan Ontiveros Ramos	Ejidatario ambientalista.	Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Choreachi.	31-1-2017
Conflicto Agrario	Comuneros	Campesinos	Michoacán, Arantepacua, Nahuatzen.	5-4-2017
Oposición a megaproyectos	Benjamín Juárez José	Presidente suplente, Mesa Directiva de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), contra la imposición del gasoducto de la Refinería Antonio Dovalí Jaime en Salina Cruz a la refinería de Coatzacoalcos, Veracruz.	Oaxaca, Matías Romero.	5-4-2017
Oposición a megaproyectos Oposición a la minería	José Alberto Toledo Villalobos	Miembro de la Red Nacional de Resistencia Civil contra las altas tarifas de energía eléctrica, defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio contra la minería.	Oaxaca, San Pedro Tapanatepec.	8-4-2017
Conflicto Agrario	Guadalupe Huet Gómez	Líder tzotzil.	Chiapas, Venustiano Carranza, Cruztón.	23-5-2017

Tabla A-3 (continúa). Militantes ambientales asesinados, según tipo de lucha, identidad, lugar y fecha de la acción (enero 2017-abril 2019)

Tipo de Lucha	Nombre o descripción de los militantes afectados	Identidad Social, incluyendo datos de entidades u otros	Lugar (Estado, poblado, municipio, etc.)	Fecha
Conflicto Agrario	Julia Ramírez Salazar (58 años); Emiliana Hernández Hernández (55 años); Nazaria Juana Ramírez (70 años); María Bautista (53 años), una niña (11 años).	Pobladores	Oaxaca, San Juan Mixtepec.	3-6-2017
Oposición a la minería	Marcelino y Víctor Sahuanitla Peña	Contratistas del Sindicato Nacional de Mineros en la empresa canadiense Torex Gold Resources, en paro de labores en demanda de que se les respete su libertad sindical.	Guerrero, Cocula.	18-11-2017
Defensa de bosques	Guadalupe Campanur Tapia, de 32 años.	Autodefensa, labores de guardabosques, talleres culturales.	Michoacán, Cherán.	16-1-2018
Conflicto Agrario	Adán Gómez González	Biólogo ambientalista.	Chiapas, Chiapa de Corzo.	27-1-2018
Oposición a megaproyectos	Catarino Aguilar Márquez y Noé Valentín Aguilar Rojas	Comuneros, oposición a explotación de bancos de arena en río Bolaños. Catarino fue representante agrario y concejal en San Lorenzo de Azqueltán.	Jalisco, Totatiche, Temastlán.	16-4-2018
Oposición a megaproyectos Lucha por el agua	Manuel Gaspar Rodríguez	Defensor de derechos humanos, Movimiento Independiente Obrero, Campesino Urbano y Popular (MIOCUP), Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA-MN). Defensa del territorio de la Sierra Norte de Puebla contra proyectos mineros e hidroeléctricas. Oposición a la instalación de una línea de alta tensión en el entronque Teziutlán 2-Tajín.	Puebla, Cuetzalán del Progreso	14-5-2018

Tabla A-3 (continúa). Militantes ambientales asesinados, según tipo de lucha, identidad, lugar y fecha de la acción (enero 2017-abril 2019)

Tipo de Lucha	Nombre o descripción de los militantes afectados	Identidad Social, incluyendo datos de entidades u otros	Lugar (Estado, poblado, municipio, etc.)	Fecha
Lucha por el agua Conflicto Agrario	Ramón Hernández Nevárez (65 años), y su hijo Anselmo Hernández Andujo (39 años).	Dirigentes de la organización campesina municipal. Hernández Nevárez encabezó demandas agrarias y la lucha por la defensa del agua en la cuenca hidrológica del río Del Carmen; denunció el control que grupos armados mantienen en la región.	Chihuahua, Namiquipa.	13-6-2018
Conflicto Agrario	13 pobladores	Pobladores.	Oaxaca, Sta. María Ecatepec, San Carlos Yautepec.	17-7-2018
Oposición a megaproyectos	Rolando Crispín López	Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), Asamblea de Pueblos de Álvaro Obregón. Policía comunitario. Opositor a las actividades de la empresa eólica Mareña Renovables, ahora Eólica del Sur (capital español).	Oaxaca, Juchitán.	22-7-2018
Conflicto Agrario	Familia de cinco miembros.	Indígenas tzotziles.	Chiapas, Chenalhó, Santa Marta.	4-8-2018
Lucha por el agua	Margarito Díaz González	Defensor del medio ambiente y de los sitios sagrados de la comunidad wixárika, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales de Jalisco, Durango y Nayarit.	Nayarit, municipio de Del Nayar, Aguamilpa.	8-9-2018
Lucha por el agua	Jesús Javier Ramos Arriola	Ingeniero forestal.	Estado de México, Tlalmanalco, San Rafael.	29-9-2018

Tabla A-3 (continúa). Militantes ambientales asesinados, según tipo de lucha, identidad, lugar y fecha de la acción (enero 2017-abril 2019)

Tipo de Lucha	Nombre o descripción de los militantes afectados	Identidad Social, incluyendo datos de entidades u otros	Lugar (Estado, poblado, municipio, etc.)	Fecha
Conflicto Agrario	Julián Carrillo Martínez.	Líder rarámuri, Presidente de Bienes Comunes.	Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Coloradas de la Virgen.	24-10-2018
Lucha por el agua	Noel Castillo Aguilar (44 años).	Miembro del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (CODED), protector de la playa y el río Copalita.	Oaxaca, Santiago Astata, Barra de la Cruz.	25-10-2018
Conflicto Agrario	Joaquín Díaz Morales.	Comisariado ejidal.	Chihuahua, Guadalupe y Calvo, Coloradas de la Virgen.	27-10-2018
Defensa de bosques	José Nava Lorenzo (48 años).	Defensor de los bosques y de los damnificados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel en 2013, fue Comisario Ejidal de la comunidad de San Vicente.	Guerrero, Chilpancingo.	29-10-2018
Conflicto Agrario	Manuel Martínez Bautista.	Campesino indígena.	Hidalgo, Yahualica, Crisolco.	24-12-2018
Conflicto Agrario	Tres Pobladores.	Campesinos.	Oaxaca, Santiago Juxtlahuaca.	14-1-2019
Lucha por el agua	Gustavo Cruz Mendoza.	Miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM), defensa de la tierra en La Chinanteca, en la región de la Cuenca del Papaloapan; oposición a instalación de una empresa purificadora de agua, por desabasto de agua en la zona.	Oaxaca, Santiago Jocotepec, Cerro Caliente.	20-1-2019

Tabla A-3 (continúa). Militantes ambientales asesinados, según tipo de lucha, identidad, lugar y fecha de la acción (enero 2017-abril 2019)

Tipo de Lucha	Nombre o descripción de los militantes afectados	Identidad Social, incluyendo datos de entidades u otros	Lugar (Estado, poblado, municipio, etc.)	Fecha
Conflicto Agrario	Bernardino García Hernández.	Comunero.	Oaxaca, Zimatlán de Lázaro Cárdenas	21-9-2019
Conflicto Agrario	Un comunero.	Campesino.	Oaxaca, Zimatlán de Lázaro Cárdenas	24-1-2019
Conflicto Agrario	Estelina López Gómez (43 años).	Militante de la resistencia civil.	Chiapas, Amatenango, Santo Tomás.	30-1-2019
Oposición a megaproyectos	Samir Flores Soberanes, esposo de Liliana Vázquez y padre de cuatro hijos de entre 3 y 15 años.	Herrero, fundador de Radio comunitaria Amiltzingo, luchó contra la termoeléctrica y el gasoducto de Huexca y el Proyecto Integral Morelos (PIM).	Morelos, Temoac, Amilcingo.	20-2-2019



WATERLATGOBACIT